



Al servicio de la paz y la justicia

SALA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Proceso:	Ejecutivo
Demandante:	2B Gráficos S.A.S. (antes Maudasa S.A.S.)
Demandados:	Grupo Empresarial Oportunidad de Negocios S.A.S. y otro
Radicado:	05001 22 03 000 2024 0084 00
Radicado Interno:	019-24
Tema:	Conflicto negativo de competencia por el factor territorial. Fuero contractual.
Decisión:	Dirime conflicto. Se le asigna la competencia al Juzgado de Pequeñas Causas de Itagüí
Providencia:	Interlocutorio No. de 2024.

Procede la Sala a resolver el conflicto negativo de competencia propuesto por el Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Itagüí frente al Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Medellín, dentro de la presente acción Ejecutiva promovida por la sociedad 2B GRÁFICOS S.A.S. (antes Maudasa S.A.S.) en contra de la sociedad GRUPO EMPRESARIAL OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS S.A.S y el señor CARLOS MARIO VÉLEZ SERNA.

I. ANTECEDENTES.

1.1. ACTUACIÓN PROCESAL.

Presentó la sociedad 2B GRÁFICOS S.A.S. demanda ejecutiva en contra del GRUPO EMPRESARIAL OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS S.A.S. y el

señor CARLOS MARIO VÉLEZ SERNA, pretendiendo el recaudo de la obligación vertida en pagaré suscrito por estos a favor de aquella, la cual dirigió al "JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE MEDELLÍN (REPARTO)"¹.

Dicha demanda le fue asignada al Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de esta localidad quien, mediante auto del 25 de enero de 2023², la rechazó por falta de competencia territorial, en atención a que la demandante había optado asignar el asunto en consideración "*al lugar de cumplimiento de la obligación que es la ciudad de Medellín*", pero que al revisar la literalidad del título no se evidenciaba que efectivamente se hubiese pactado como lugar de cumplimiento esa ciudad, sino que, al respecto, se había señalado que "*el pago total de la mencionada obligación se efectuará en una sola cuota, el día 13 del mes 08 del año 2022, en cualquier ciudad de Colombia o en las oficinas de MAUDASA S.A.S*" y que esta última tenía su domicilio, según el certificado de existencia y presentación, en el municipio de Itagüí, sin que se diera cuenta en el mismo de alguna sucursal o sede en otra ciudad. En consecuencia, dispuso la remisión de la demanda a los jueces civiles municipales (reparto) de dicha localidad.

Repartida al Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Itagüí, a su vez se abstuvo de asumir competencia³, soportado en que la dirección indicada en para efectos de notificación de la parte demandada correspondía al municipio de Medellín, a dónde se había dirigido el líbelo genitor, por lo que debía respetarse la voluntad de la sociedad actora en dicha escogencia, en armonía con lo contemplado en el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso y que ese despacho judicial, al tenor de lo establecido en el Acuerdo CSJAA16-1782 del 11 de agosto de 2016, solo tenía tiene competencia territorial en la comuna 4, en el barrio Calatrava de la comuna 5 y en el Corregimiento El Manzanillo de Itagüí – Antioquía. Corolario con lo anterior, propuso el conflicto negativo de competencia.

¹ [02EscritoDemanda2023000063.pdf](#) / [ExpedienteRemitido](#)

² [03RechazaCompetenciaTerritorial2023000063.pdf](#) / [ExpedienteRemitido](#)

³ [10AutoProponeConflicto 08-02-2024.pdf](#) / [ExpedienteRemitido](#)

II. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde determinar en el sub judice, cuál de los jueces en conflicto es el competente territorialmente para conocer de la acción ejecutiva, de cara a lo señalado por la ejecutante en el escrito de demanda y las normas que regulan la materia

Para resolver lo propio, habrán de tenerse en cuenta las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

3.1. COMPETENCIA. Es competente esta Sala para zanjar la presente colisión por haberse suscitado entre dos Juzgados de la misma categoría y especialidad, pero de distinto circuito, pertenecientes a este distrito y ser el Tribunal Superior funcional común de ambos de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Código General del Proceso.

3.1. DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL.

El factor territorial obra con fundamento en varios fueros como lo son el *personal*, que hace referencia al domicilio del demandado; el *real*, que alude al lugar donde se encuentra ubicado el bien respecto del cual versa la relación sustancial y, el *contractual*, que tiene en consideración al lugar donde debe cumplirse la obligación derivada de un negocio jurídico.

Ahora es factible que se presente concurrencia (que varios funcionarios puedan conocer de la controversia) dentro del mismo fuero, cuando con la circunstancia determinante de la competencia arroje varios lugares, ya sea porque se demande a varios sujetos con distinto domicilio, porque la relación sustancial recaiga sobre varios bienes ubicados en lugares diferentes, o porque se haya indicado por las partes más de un lugar para el cumplimiento de las obligaciones del contrato. O, entre los diferentes

fueros, porque exista la posibilidad de determinar la competencia territorial por dos o tres de ellos.

Es así, que considerando lo anterior, en el artículo 28 del Código General del Proceso se regularon las reglas que deben acogerse para determinar la competencia por el factor territorial, estableciendo como general para los procesos contenciosos, el *fuero personal*, esto es, el domicilio del demandado, salvo que exista una norma que estipule lo contrario, pudiendo la actora, incluso, escoger entre los varios que pueda tener este, de ser el caso. En el evento de no contar el demandado con domicilio en el país, será competente el juez de su residencia y de no tenerla tampoco o de desconocerse, lo será el del domicilio o residencia del demandante (numeral 1°).

Ahora, para los procesos que involucren títulos ejecutivos, también se le atribuyó competencia, atendiendo el *fuero contractual*, al juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, y se contempló la posibilidad de que, en el caso de que este y el domicilio del demandado difieran, el demandante eligiera cualquiera de ellos para incoar su demanda.

3.2. CASO CONCRETO.

En el *sub judice*, la parte actora dirigió la demanda ejecutiva a los Jueces Civiles Municipales de Medellín (Reparto), indicando en la misma que dicha atribución de competencia se hacía con fundamento en “el *lugar de cumplimiento de la obligación que es la ciudad de Medellín*”.

Sin embargo, el juez a quien le fue asignada inicialmente la competencia, consideró que no se había pactado expresamente en el título, como lugar de cumplimiento, la ciudad de Medellín, pues se había indicado que el pago se realizaría en las oficinas de la demandante, quien tiene su domicilio en Itagüí, sin que se avizorara otra sucursal o sede en

aquella ciudad. Por su parte, el funcionario judicial de esta última municipal, adujo como argumento para también rehusar competencia que el lugar indicado en el escrito introductorio para notificar a la parte demandada era Medellín, debiendo respetarse la escogencia de la actora y lo establecido en el numeral 1° del artículo 28 del Código General del Proceso.

Al respecto, resulta necesario precisar que las nociones de “domicilio” y sitio de “notificaciones” son enteramente distintas, por lo que, el lugar que se suministra para recibir notificación no es inexorablemente el que corresponde al domicilio. El primero, conforme a la definición del artículo 76 del Código Civil, “consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella”, esto es, el asiento legal o jurídico de una persona para el ejercicio o la aplicación de ciertos derechos; mientras que el segundo, solamente hace referencia al lugar concreto, dentro o fuera del domicilio del demandado, donde puede ser hallado con el fin de avisarle de los actos procesales que así lo requieran.

En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia⁴:

Es equivocado el razonamiento de un funcionario cuando confunde la noción de lugar para recibir notificaciones con el concepto de domicilio, factor legal de competencia. Al respecto la Corporación ha señalado: “Menester es recordar, una vez más, cómo no puede confundirse el domicilio de las partes, que el numeral segundo del artículo 75 ibídem establece como presupuesto de todo libelo, con el lugar donde ellas han de recibir notificaciones personales, a que se refiere el mismo precepto en el numeral 11, con mayor razón siendo que aquél, a términos del artículo 76 del Código Civil, consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella, en tanto que éste tiene un marcado talante procesal imposible de asemejar con el aludido atributo de la personalidad” (Auto de 3 de mayo de 2011, Radicación #2011-00518-00).”

⁴ AC1331-2021 del 21 de abril de 2021. M.P. LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

No obstante, debe indicarse que, como en este caso concurren dos fueros: el *personal*, que atribuye la competencia con fundamento en el domicilio del demandado (numeral 1° del artículo 28 C.G.P.) y, el *contractual*, que lo hace en consideración al lugar de cumplimiento de las obligaciones contenidas, en este caso, en el título valor (numeral 3° *ibídem*), le era dable a la demandante escoger uno de ellos para formular sus pretensiones, optando, según el acápite “COMPETENCIA CUANTIA Y PROCEDIMIENTO”, por el segundo, esto es, por el lugar donde debía realizar el pago de la obligación crediticia incorporada en el pagaré objeto de recaudo, debiendo ser esta regla la que debe verificarse.

Ahora, si bien la parte actora afirma que de acuerdo con lo indicado en “*la orden de compra, el pagaré y la carta de instrucciones*”, el lugar de cumplimiento de las obligaciones era Medellín, una vez examinado el contenido del referido título valor y de la carta de instrucciones (pues orden de compra no se adunó), puede evidenciarse que, ambos coinciden en señalar que el pago se realizará en cualquiera de las oficinas de MAUDASA S.A.S., esto es, de la sociedad demandante, hoy denominada 2B GRÁFICOS S.A.S. y de acuerdo con el certificado de existencia y representación de esta persona jurídica, la misma solo tiene un establecimiento de comercio en el municipio de Itagüí, que corresponde, incluso, a su domicilio.

Así las cosas, al escoger la parte demandante formular la demanda en atención al fuero contractual, esto es, con fundamento en el numeral 3° del artículo 28 del Código General del Proceso, debió considerar el lugar donde tiene localizada su única oficina, por lo menos, así figura registrado el respectivo certificado, que es Itagüí y, por ende, incoar la acción ante los funcionarios con jurisdicción en ese municipio, que bajo dicha escogencia son los que revisten competencia.

Tal vez, lo aquí acontecido, es que el apoderado judicial, de manera desprevenida hizo una lectura sobre dicho aspecto y, entendió de manera errada que la estipulación tenía como finalidad que el pago fuese pactado en el domicilio de la demandada, el cual, si corresponde a esta ciudad, pero en tal evento, no habría tenido que acudir a la referida regla de

competencia territorial, pues hubiese bastado aplicar la regla general, esto es, el fuero personal.

Así las cosas, no era dable al Juzgado de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Itagüí, so pretexto de tener la demandada el domicilio en Medellín, rehusarse a avocar el conocimiento de esta acción ejecutiva, pues claro quedó en la demanda que la ejecutante eligió, para determinar la competencia territorial, el lugar de cumplimiento de las obligaciones y no la general, aspecto que ni siquiera fue objeto de pronunciamiento en la decisión en la que se dispuso generar el conflicto y, que de haberlo hecho, tal vez la conclusión hubiese sido diferente, por lo que **se le instará a no actuar apresuradamente en estos casos, pues más allá del alto volumen de reparto que tienen, resulta peor del desgaste que implica estos reprocesamientos y la afectación para los justiciables que en vez de avizorar soluciones prontas para su caso, se colocan a deambular sus expedientes de despacho en despacho y congestionar, sin necesidad, otras dependencias judiciales.**

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, EN SALA UNITARIA;**

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que el competente para conocer de la acción Ejecutiva promovida por la sociedad 2B GRÁFICOS S.A.S. (antes Maudasa S.A.S.) en contra del GRUPO EMPRESARIAL OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS S.A.S y el señor CARLOS MARIO VÉLEZ SERNA, es el Juzgado de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Itagüí.

SEGUNDO: ORDENAR la remisión del asunto antes referenciado al citado despacho judicial, **e instarlo, respetuosamente, en los términos indicados en la parte motiva.**

TERCERO: COMUNICAR lo decidido en esta providencia al Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Medellín.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BENJAMÍN DE J. YEPES PUERTA
Magistrado

Firmado Por:
Benjamin De Jesus Yepes Puerta
Magistrado
Sala Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f0d26e7ffb7f5c3303f282c7fa457b0e7f4e437132ba6d55b4f5d82de3ffcb6a**
Documento generado en 29/02/2024 04:37:45 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>